



**HAL**  
open science

## Identidades locales, identidades negras : la conformación del campo político en Tumaco (1950-1998)

Odile Hoffmann

► **To cite this version:**

Odile Hoffmann. Identidades locales, identidades negras : la conformación del campo político en Tumaco (1950-1998). M.Agier, M.Alvarez, O.Hoffmann, E.Restrepo. Tumaco: haciendo ciudad. Historia, identidad y cultura, ICAN-IRD-UNIVALLE, Bogotá, pp.245-276, 1999. halshs-00463469

**HAL Id: halshs-00463469**

**<https://shs.hal.science/halshs-00463469>**

Submitted on 12 Mar 2010

**HAL** is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

*Hoffmann, Odile, 1999, Identidades locales, identidades negras : la conformación del campo político en Tumaco (1950-1998), pp245-276 en Tumaco: haciendo ciudad. Historia, identidad y cultura, de M.Agier, M.Alvarez, O.Hoffmann, E.Restrepo, ICAN-IRD-UNIVALLE, Bogotá, 286p.*

## **Identidades locales, identidades negras : la conformación del campo político en Tumaco (1950-1998)**

**Odile Hoffmann**

### 1. “Hacer política” en Nariño, preguntas y enfoques

En el Pacífico sur de mediados de los años 1990, la definición de los hombres y mujeres político(a)s sigue girando en torno a su afiliación “betista” o “anti-betista”, por lo menos en coyunturas electorales. La historia del “feudo betista”, del nombre del jefe político Samuel Alberto Escrucería Delgado que rigió la política en la región de Tumaco y del litoral nariñense desde los años 1960, marca las pautas según un esquema clientelista extremadamente personalizado. Al mismo tiempo, tal y como lo había notado Whitten (1992) en el Pacífico de los años 1960, los asuntos políticos siguen despertando gran interés entre la población, rural o urbana, tanto en periodos de elecciones, como fuera de estos momentos de cristalización.

Esta doble tradición, de clientelismo exacerbado y de pregnancia de la política sobre la vida social y cultural local, no llevó sin embargo a la constitución de actores políticos definidos, o coaliciones de intereses bien conformados, menos aún de grupos de poder consolidados. A partir de los años 1990, con la pérdida de influencia del gamonal, los acuerdos electorales, las prácticas de alianzas y las esferas de conflicto dibujan un espacio político fluido y fluctuante, que parece a primera vista estructurarse en torno a cuestiones de estrategia coyuntural desarrolladas por personas - jefes y líderes - sin que aparezcan lógicas de largo o mediano plazo.

Por otra parte, al mismo tiempo, y como si fueran campos de acción separados y autónomos, existieron en el Pacífico sur otras formas de expresión política, informales u organizadas, puntuales o persistentes en el tiempo, pacíficas o violentas, que involucraron a grupos pequeños o a multitudes. La población tumaqueña, desde los años 1970 y en el contexto de una dominación política de tipo hegemónico, no ha dejado de “hablar”, o por lo menos ha intentado hacerlo, en el marco de un conjunto de movimientos, organizaciones y otros ámbitos de movilización que podríamos calificar de “sociedad civil” tumaqueña.

Hoy, en momentos en que aparecen con fuerza nuevos actores políticos, a raíz de la Constitución de 1991 y de la Ley 70 de 1993, es importante rebasar esta aparente confusión entre un sistema político dominante y estable, y una sociedad civil inquieta y movilizadora, para descifrar los mecanismos de participación local en la política, tanto desde el punto de vista de los actores tradicionales como desde otras perspectivas que no se limitan al campo de los partidos y las elecciones. En particular, con las nuevas expectativas ligadas a la Constitución de 1991, se

necesita construir nuevos discursos políticos (ver Grueso, Rosero y Escobar 1997) así como revisar las prácticas políticas que imperan en el mundo político del Pacífico con estudios precisos<sup>1</sup>. El presente trabajo quisiera ser un aporte en este sentido. La construcción de formas originales de hacer política implica en efecto recuperar partes de la historia política regional, y sobre todo tender puentes entre espacios de participación que pueden aparecer fragmentados pero que llevan entre sí coherencias y compatibilidades.

## 2. La región de Tumaco: una historia jefes y gamonales

### 2.1. El contexto regional, económico e histórico

Al sur del Pacífico, el centro urbano de Tumaco (alrededor de 100 000 habitantes en 1998) extiende su influencia hasta los otros municipios del litoral nariñense, exceptuando la zona norte que está en relación más estrecha con Guapi y Buenaventura. A nivel político, las influencias de los hombres políticos -liberales casi todos - llegan hasta Barbacoas al este y Mosquera al norte, abarcando los municipios de Roberto Payán, Magüí y Salahonda. Estos seis municipios - incluyendo Tumaco- contaban en 1993 con 200 000 habitantes, o sea 77% del litoral, de población negra en gran mayoría. En los municipios nariñenses del piedemonte y de los Andes, tanto el poblamiento (indígena y mestizo) como las redes políticas (otros jefes políticos, partido conservador dominante) son distintos, definiéndose así la “región de Tumaco” como un espacio geográfico identificable y reconocible, diferenciado de las otras regiones del Pacífico, al norte, y en estrecha relación, tanto económica como social y política, con la ciudad de Cali.

Desde la Colonia y durante el siglo XIX, Tumaco no es sino un centro secundario frente a Barbacoas e Iscuandé. Después del ocaso del modelo de extracción/exportación de la primera mitad del siglo XX (ver los capítulos 1 y 2 de este libro), los años 1960-1990 están marcados por un crecimiento urbano acelerado y, a nivel económico, por la coexistencia de un sistema basado en la pequeña agricultura combinada con la extracción de madera y la pesca (en el centro y norte de la región), junto a un sistema agrícola de plantaciones en manos de grandes capitalistas foráneos (alrededor de la carretera Tumaco-Pasto y del río Mira principalmente). Son los años en los que las zanjas se ahondan entre la ciudad y los campos por un lado, entre campesinos y plantaciones por otro, mientras la crisis actual afecta a todos y propicia intensos movimientos de población. Fueron también los años del “imperio betista”, cuando se consolida y después se finaliza el gamonalismo regional. En seguida veremos cómo éste se gesta, aprovechando las redes construidas por otros al finalizar la Violencia.

### 2.2. Las violencias de la Violencia

La violencia que azota el país en los años 1950 llega atenuada en el Pacífico donde los liberales son mayoría y los conservadores sin capacidad de protagonismo. Sin embargo, en la zona de la carretera, los pobladores son perseguidos por ser de tendencia liberal, a veces denunciados por los propios maestros, y tienen que huir a Ecuador o refugiarse en Tumaco, abandonando sus parcelas. En los ríos la Violencia se expresa a través la imposición de autoridades de fuera. En el río

---

<sup>1</sup> en particular el papel de los partidos y de las prácticas clientelistas, ver Khittel-1999 en Chocó, Linda Helfrich-1998 en Tumaco, Agudelo-1998 en Guapi y Buenaventura

Mejicano por ejemplo, se nombran inspectores desde Tumaco, recordados por su autoritarismo y crueldad : "aquí sí hubo conservadores, unos vergajos... Era la maldad." Violaciones y robos eran frecuentes, "las muchachas se tenían que esconder"... En el Mira-Candelilla, "llegaron pájaros de la Violencia a los que Rojas Pinilla les dio tierras. Vinieron, trabajaron mucho pero son muy violentos. No son de aquí ni son negros." (entrevistas en el río Mejicano, 1996-1997).

Emigración a la ciudad para los nativos, llegada de foráneos a ciertas partes de los ríos, imposición de autoridades : la Violencia en Tumaco significó modificaciones sustanciales en la manera de vivir y compartir los espacios cotidianos, tanto en los ríos como en la ciudad. Aún si no resultaron tan dramáticos como en otras regiones, los procesos violentos de los años 1950 marcaron, junto con otros eventos (salida de los negociantes arruinados por el incendio de 1947, caída del mercado exportador, y sobre todo llegada de nuevos empresarios agro-industriales apoyados por las instituciones de Estado), un hito en la historia regional.

La situación de violencia se calma a fines de los años 1950, y se restablece el control de jefes políticos locales que se comparten el espacio, como lo muestra el ejemplo de la zona de la carretera : "de Tumaco hasta Bucheli y Cajapi reinaban familiares de Flavio Ortiz. De Cajapi a Llorente estaba Pablo Reinol Erazo, y su influencia se extendía hasta el río Mira. En Guayacana había otro líder, Ruben Flores, de la misma línea liberal. En Tumaco dominaba la familia Llorente, político, médico y representante en Bogotá" (Porfirio Becerra, oct. 1996). Todos liberales, asientan su poder en el control del trabajo, del dinero y de las tierras : Pablo Reinol era contratista del Ferrocarril, pero también terrateniente con ganado y plátano, agente general de aduana, tenía la agencia de aguardiente, prestaba dinero, tenía almacén de ropa y granero, ocupaba 70 hombres diario... Ruben Flores era comerciante, Flavio Ortiz y Maximiliano Llorente eran políticos de alcance regional y nacional, oriundos de Barbacoas. Estos jefes políticos tenían poderíos territorializados, ligados a intereses económicos directos: transporte, comercio, plantaciones... Manejaban su clientela de modo paternalista-clientelar y eran muy cercanos a la población en su trabajo diario. Esta organización fragmentada es la que aprovecha "el imperio betista" unos años más tarde, al apoyarse en líderes micro-locales para asentar su legitimidad antes de desconocerlos para afirmar su propia autoridad.

### 2.3. El imperio betista durante 30 años (1960-1990)

El imperio betista no nace de la nada. Samuel Escrucería Delgado (Beto grande) es hijo, sobrino y nieto de hombres que tenían cierta importancia en Tumaco, ya que eran parte de la élite negociante de origen europea (francesa, italiana, alemana), convertida a élite política local a partir de los años 1920-40. Samuel Escrucería retoma la herencia política y da un giro político al establecer relaciones más estrechas con los políticos ya existentes : Flavio Ortíz y Jorge Cuero Miranda, negros de Barbacoas, así como Luis Avelino Pérez, blanco, de Barbacoas también - padre del actual senador Luis Eladio Pérez-, y el conservador Hernando Mosquera, de origen campesina de Salahonda.

A nivel regional Samuel Escrucería extiende así su territorio político, pero a principios de los años 1960 rompe sus alianzas con Luis Avelino Pérez, en 1962-63, y con Flavio Ortíz de quien pelea el curul en la Cámara en 1962-64. A nivel local igualmente, Beto rompe con las prácticas de los políticos que lo precedieron : a diferencia de las élites urbanas anteriores y de los pastusos

que sólo conocían las cabeceras municipales, él da un lugar preeminente a las zonas rurales. “Beto fue revolucionario en su tiempo, en reacción contra los pastusos” (Roy Sanchez, candidato a concejal en Tumaco, 1997). El “crea” el campo en Tumaco y en el litoral, hace inversiones múltiples (“Beto hizo todos los caminos, escuelas, plantas, desembarcaderos, parques, calles”, campesinos de río Mejicano). Se ve como “fundador”, con el prestigio y la legitimidad que confiere tal categoría en esta zona de colonización reciente, donde siempre se considera al fundador de la vereda, sea histórico o mítico, con mucho respeto y a veces autoridad.

Sobre todo, Beto conoce a todo el mundo por su nombre, sea campesino o gran negociante, y recuerda a todos aunque sea años después -para bien o para mal. No deja de ir a los ríos y concede favores a diestra y siniestra, mediante nombramientos y jubilaciones. Nunca fue alcalde, pero manejaba la chequera del ayuntamiento como si fuera suya, desde la calle o en su despacho. Él mismo hablaba de Tumaco como de “su gran finca” o su “tablero de ajedrez” donde él movía las piezas. En su tiempo, Beto sacaba su legitimidad de prácticas paternalistas bastante eficaces en términos de otorgamiento de bienes, servicios y dinero a poblaciones por lo demás sumamente pobres y aisladas. El clientelismo, al igual que en otras partes del país, fue el mecanismo más eficaz para asegurar una mínima redistribución (ver Leal y Davila 1994). Pero también interviene otro “ingrediente” en la estrategia política de Samuel Escrucería : es el primero en reivindicar la “identidad” tumaqueña y a utilizarla como defensa contra los pastusos, que siempre son percibidos en el litoral como posibles agresores económicos o políticos, dominantes y arrogantes hacia un “nosotros” que no se dice “negros” sino “tumaqueños”, aunque valga para todo el litoral. De alguna manera, Beto es quien dio título de nobleza a los habitantes de la región, haciéndolos sentir autónomos y poderosos frente a “los otros”, de Pasto o Bogotá.

La lealtad hacia el gamonal sobrepasa eventuales críticas (“Beto es narco pero cumple”) y perdura hasta su muerte, en 1992. En efecto Samuel Escrucería Delgado tenía nexos estrechos con el narcotráfico, situación que lo llevó a purgar cadena perpetua en una cárcel en Miami. Murió en la cárcel, después de ocho años. La familia rapatrió su cuerpo para un entierro grandioso en Tumaco, al que asistió todo el pueblo. Su hijo Samuel Escrucería Manzi (Betico) recoge la herencia paternal, bajo el gobierno y apadrinado por Turbay Ayala. Sin embargo a nivel local no asume el trabajo que significa reproducir las redes de clientela a través de los contactos interpersonales, y al final no logra mantener el prestigio de su padre (“A Betico le sobra plata pero engaña a la gente”). Prófugo de las leyes colombianas en Brasil durante un tiempo, condenado en 1988 por peculado en el erario público en un fraude de la Caja Agraria en Tumaco ocurrido en 1978, desaforado en 1992 de su curul de senador, Samuel Escrucería hijo regresa sin embargo a la política y logra una inversión discursiva impresionante al presentarse, a él y su familia, como víctimas de la coalición entre “los gringos” (la DEA, Drug Enforcement Agency) y un gobierno corrupto y débil. Impedido en las elecciones nacionales por su desafuero, se presenta en las elecciones municipales de 1997 y sigue la tradición familiar al declarar obrar para Tumaco y “el repunte” de la familia Escrucería : “mi tío al Senado (Gustavo), mi hermana a la Cámara (Sonia), mi primo a la Asamblea (Diego), yo a la alcaldía (Samuel Alberto) ... y mi hijo para futuro alcalde” (discurso inaugural de la campaña, julio de 1997). La familia, el poder y el porvenir de la región se confunden en esta gran prueba de nepotismo abiertamente reivindicado.

En los dispositivos regionales y nacionales, Beto construye su “imperio” con la participación activa de toda su familia - entre todos abarcan puestos en la Asamblea de Nariño y en el

Congreso, como diputados y senadores (ver Helfrich 1998) -, y con el apoyo del partido liberal. Todo pasó como si los políticos nacionales no querían aventurarse en estas tierras de población relativamente poco densa y en mayoría negra. A los ojos de los andinos, Beto apareció como el mediador ideal, caudillo blanco pero oriundo de la región y conocedor de los mecanismos tradicionales de hacer política, basados en la interpersonalidad y en una pertenencia común a un espacio claramente diferenciado. Sin competencia a nivel nacional, Beto pudo constituir su capital político a partir de un “territorio” local, en el sentido de un espacio político construido y apropiado por él, con sus propias reglas de manejo político pero sobre todo económico. Por estas razones hablamos de “feudo” o de “imperio” betista, metáforas político-espaciales que apuntan a subrayar por un lado, la condición de dependientes de los habitantes hacia el gamonal, y por otro la capacidad de mando del jefe a través una serie de líderes locales sin autonomía alguna, él guardando todos los medios de control (como lo simboliza el manejo personal de la chequera de la Alcaldía). Como en otras partes del país, el aislamiento geográfico propició el fortalecimiento de imperios regionales y el gamonalismo, sólo que ahí el capital político se constituyó además a partir de una reivindicación de identidad, aparentemente geográfica aunque construida, de hecho, sobre la idea de una discriminación histórica hacia la población nativa, es decir negra. Para Beto y sus seguidores, la región de Tumaco fungió como un capital espacial donde invirtieron esfuerzos políticos (constitución y mantenimiento de las redes de clientela) y del cual sacaron intereses -aquí también vale precisar: políticos y económicos -a corto y largo plazo, a dentro y fuera de la región. El aparato político nacional le dejó “carta blanca” en el juego político regional, quitándole su apoyo solamente cuando las pruebas de corrupción y malversación se hicieron demasiado evidentes.

El imperio betista surgió de la combinación entre un capital político-familiar anteriormente constituido sobre una base local, tumaqueña, y la habilidad de Samuel Escrucería Delgado a insertarse en las redes de poder, regionales y después nacionales, desde donde construyó su propio espacio político. El clientelismo se combinó con un manejo de un discurso nuevo, construido sobre la idea de una identidad tumaqueña, orgullosa, que por primera vez “ubica” a los habitantes del litoral en el espacio político nacional, otorgándoles, a sus propios ojos, reconocimiento y respeto. Empieza a decaer en los años 1980, con la conjunción de varios fenómenos que se estaban gestando desde la caída y luego la muerte de Beto : inconformismo de la población urbana frente al abandono de la ciudad, movilizaciones populares, debilitamiento de las redes clientelistas con Betico que no invierte tanto como su padre en las relaciones interpersonales, apertura de nuevos espacios políticos con las elecciones a alcaldes populares (1988), marginación del aparato político nacional a raíz de las condenaciones de que fueron objeto tanto Beto grande como su hijo. Si ninguna de estas razones fue suficiente en sí, su conjunción llegó a debilitar el dispositivo betista de tal forma que, a pesar de varios intentos de recuperación, perdió el control del aparato político regional a partir de los años 1990.

#### 2.4. Los alcaldes populares (a partir de 1988)

A partir de las elecciones populares a alcaldes, las pugnas electorales enfrentan facciones del liberalismo regional<sup>2</sup> definidas ante todo por su posición de alianza u oposición a los Beto (Samuel Escrucería padre e hijo). Aunque éstos perdieron todas las elecciones a alcaldes desde 1990, siguen como corriente importante a nivel regional. En efecto como lo dice el propio Samuel Escrucería Manzi después de su fracaso electoral de 1997 : “perdimos la alcaldía de Tumaco pero tenemos gobernador y ocho alcaldes en el litoral de Nariño”.

Las elecciones a alcaldes populares en Tumaco

<u>fecha de las elecciones</u>	<u>candidatos y alcalde electo</u>	<u>observaciones</u>	<u>Nº de votos</u>	<u>votación total</u>
1988	<b>Seidel Santos Eric</b>  Kaiser Mendoza Ernesto Quiñones Solis Evelio (social-conservador) Biojó G. Angel de Jesus Rivera Posada José	candidato betista, con Franklin García, ex-MOIR, salieron prófugos por corrupción septiembre 1988, Tumacazo	14751 (55,6%)  11720 25 19 2	26557
1990	<b>Kaiser Mendoza Ernesto</b>  Manzi de Escrucería Maria Vidal Caballero Nelson	apoyado por una coalición Nilo-Rosero-UP para contrar el betismo	15472 (59%)  10623 112	26279
1992	<b>Quiñónez Angulo Teodulo Overman</b> Primer alcalde popular negro de Tumaco.  Del Castillo T. Nilo Escrucería de Maria Leonora Manzi Hurtado German Vicente Grueso Arroyo Manuel Roberto Escrucería C. Diego Alzate Zuluaga Javier (conservador)	apoyado por “los duros” (Pedro Mtz, Martin Arroyo, Buitrago) y Rosero contra betistas.	7151 (30,6%)  7097 78 252 1723 5887 209	23915
1994	<b>Nilo del Castillo Tórrez</b>  Sonia Alba Escrucería Jesus Rosero Ruano Emiro Pedro Cabezas Casanova	apoyado por el alcalde de Cali, Mauricio Gúzman, en contra de Rosero y betistas.	9730 (34,1%)  6990 9487 1703	29939
1997	<b>Newton Valencia Martínez</b>	apoyado finalmente por Nilo contra Beto, y apoyo popular	18196 (54,6%)	35131

<sup>2</sup> Con dos excepciones, en 1988 y 1992 donde se presentaron candidatos de tendencia conservadora con muy bajos resultados, todos los candidatos son de tendencia liberal, así aparezcan o no con el aval del Partido Liberal.

Samuel Alberto Escrucería	13086
José Rivera Posada	194
Cesar Augusto Díaz Cuero	37
Hernando Antonio Cantín Jarvis	1604

Fuentes : Registraduría del Estado Civil, Pasto, 1998, y entrevistas

Comentarios generalizados en la región y a fuera afirman que “en el Pacífico, sólo existe compra de votos”. Un candidato a la alcaldía en 1997, J.Rivera, estimaba que de los 60000 votantes potenciales en Tumaco, sólo 8000 son de opinión. Los demás están comprados. Las denuncias en el periódico local describieron ampliamente las donaciones de botas, machetes, dinero en efectivo en vísperas de las elecciones (La Ola, octubre-noviembre de 1997) y los puestos de los candidatos frente a las mesas de votación parecen más comerciales que políticos... ¿Sería la competición electoral un mero asunto de mercadeo? Al igual que en las elecciones locales anteriores, la respuesta es formalmente negativa : más allá de los intercambios de bienes en el momento de la campaña electoral, se juegan imágenes, discursos, expectativas reales de los votantes. Los candidatos “quemados” bien lo saben, la compra de votos no basta para asegurar la elección. Queda entonces por aclarar los mecanismos subyacentes de la participación y adhesión a ciertos prácticas y discursos políticos más que a otros.

Las primeras elecciones a alcaldes populares en 1988 no significaron cambios inmediatos pero a partir de 1990 los candidatos betistas tuvieron que enfrentar los candidatos de las otras facciones que componen el panorama político local : roserismo, nilismo, ahora newtismo. Jesús Rosero Ruano, que nunca fue alcalde pero apoyó a los candidatos electos en 1990 y 1992, representó para muchos la alternativa democrática frente al betismo, hasta 1997/98 en que hizo alianza con su antiguo adversario. Nilo del Castillo, candidato “quemado” en 1992 y electo en 1994, gozó del apoyo del entonces alcalde de Cali, Mauricio Guzmán. Newton Valencia se presenta como candidato popular local anti-betista y gana la alcaldía en 1997.

Sin entrar aquí en detalles<sup>3</sup>, se puede resaltar cómo, en estos enfrentamientos entre corrientes personalizadas adentro de una misma afiliación liberal, se combinan efectos meramente locales e influencias de los ámbitos de la política nacional o macro regional. Entre los primeros se nota la importancia del voto de rechazo al betismo en 1990, el apoyo popular a Newton en 1997 y el “voto negro” en 1992. Por primera vez, en aquellas elecciones, se manejó la identidad étnica como argumento electoral, ya que el candidato roserista, Teódulo Quiñones, se anunciaba como el “primer alcalde popular negro de Tumaco”, generando muchas expectativas en amplios sectores de la población.

Por su parte la política regional y nacional se hace sentir en cada elección, con mayor fuerza en algunas (el apoyo de Mauricio Guzmán a Nilo del Castillo en 1994, la alianza de Samuel Escrucería con Rosero en 1997) que en otras. Fenómenos generalizados en todo el país, como la tendencia a la fragmentación del sistema de partido y el faccionamiento intrapartidista, también se dan en Tumaco. La multiplicación reciente de partidos o movimientos que respaldan a los candidatos (12 en las últimas elecciones) responde, más que a la participación de nuevos actores políticos, al interés renovado de los políticos tradicionales por los ámbitos locales, a raíz de la

<sup>3</sup> Ver análisis e las dinámicas electorales en Helfrich (1998). En Hoffmann (1999) se presentan descripciones más detalladas de la argumentación presentada en este capítulo.

descentralización que otorga mayores prerrogativas - incluso financieras - a los niveles locales de decisión.

Se puede afirmar que en Tumaco, más allá de la compra de votos y otros mecanismos de corrupción del voto, las elecciones son motivos de juegos propiamente políticos, como fueron por ejemplo el rechazo a la dominación betista (1990), la adhesión a argumentos étnicos (1992) y más recientemente el apoyo popular a un candidato “libre”, “negro”, “de los nuestros” (1997). La adhesión partidista - o en este caso faccionalista - no determina el voto, es solamente uno de los componentes, al igual que los mecanismos clientelistas básicos, siempre presentes pero no decisivos.

Si la dinámica electoral es elemento importante del campo político, tampoco lo abarca todo. La abstención sigue del orden de 40%, y sería mucho mayor si el voto no estuviera fuertemente solicitado por los candidatos y por el propio gobierno que subordina ciertas prestaciones al cumplimiento del “deber cívico” (becas para escolaridad de los hijos, empleos oficiales, etc.). La debilidad de los partidos tampoco equivale a un desinterés de la población por los asuntos políticos, como lo muestran las otras formas de participación popular, bajo la forma de acciones colectivas y/o de movilización y organización.

### 3. Tumaco, una sociedad civil en construcción

Población apolítica? donde sólo funciona la compra de votos? sometida pasivamente al imperio betista? ¿Cómo explicar entonces las fuertes movilizaciones que conoció Tumaco en los últimos 25 años y que fueron marcadas por momentos de extrema tensión, incluso de violencia? ¿Y cómo interpretar el surgimiento de movimientos y organizaciones que empiezan a ser parte importante del panorama político regional a partir de la década de los 1970?

#### 3.1. Movilizaciones y acciones colectivas

En los últimos 25 años, las movilizaciones populares se dieron alrededor de temas como el empleo, los servicios (electrificación, salud, educación) y la defensa del medioambiente (derrame de petróleo en 1982, lucha contra las retroexcavadoras en 1995). Sin embargo un análisis más detenido deja ver otros elementos.

En 1976-1977, el cierre de la empresa Maderas y Chapas de Nariño, cuyo gerente era sobrino de López Michelsen, suscita una gran movilización en Tumaco : los obreros, sus familias, luego el sector educativo - estudiantes y maestros - y los políticos locales de oposición participan en la lucha, que dura varios meses y en la que se involucran militantes de MOIR y universitarios de la Universidad del Valle y la Universidad Nacional. Principal fuente de empleo fuera del sector administrativo<sup>4</sup>, Maderas y Chapas de Nariño es representativo de las lógicas capitalistas en el Pacífico : las empresas se construyen sobre una base casi exclusivamente extractiva, y dejan de operar cuando el recurso - aquí la madera - viene a escasear o a disminuir su rentabilidad. El cierre

---

<sup>4</sup> La empresa cobijaba “en mayor número a la Población Económicamente Activa -PEA- de Tumaco, directa o indirectamente : 800 trabajadores de planta (en tres nóminas), más unos 3000 empleos indirectos, más los comercios, bancos, prestadores de servicio, etc... Era la bonanza de Tumaco” (Gúzman Hoyos, 1977, p91).

de Maderas y Chapas de Nariño puso fin a una fase incipiente de proletarización y la movilización no logró desembocar en una toma de control del aparato productivo por parte de los obreros, como era previsto en un momento. Tomando el contexto ideológico de la época, la lucha se dio en un inicio en contra de las lógicas capitalistas basadas en la explotación extractiva. Con la movilización masiva, el conflicto se vino transformando en reivindicaciones contra el abandono de Tumaco por parte de los empresarios capitalistas por un lado, del Estado que no interviene, por otro.

Estos mismos reclamos animan la creación de la Junta Cívica de Mejoras y Defensa de los intereses de Tumaco, en 1982, que se organiza a raíz de un derrame de crudo por ECOPETROL. Liderada por miembros de la clase media, la elite escolarizada y los escasos militantes políticos (MOIR y Partido comunista -PC-), con reivindicaciones relativas a los servicios (acueducto, electrificación, salud, educación), la Junta incluye a líderes que también incursionan en el ámbito político-electoral (E.Kaiser, J.Rosero Ruano). En el ambiente de bloqueo político-institucional que precede a la asamblea constituyente de 1991, la Junta se inserta en la ola de movimientos cívicos que representaban, en todo el país, los únicos espacios de negociación para los grupos de oposición. En Tumaco, la movilización gira en torno a la defensa de un espacio local denigrado, discriminado, olvidado por el centro, que está reivindicando su lugar frente a un “centro” que no responde. Este movimiento fue antecedente directo del grupo TUMACO Alerta SOS, que nace en 1987 y liderea las protestas populares que desembocan, en septiembre 1988, en el Tumacazo. Este último fue una irrupción de ira de la población frente a la degradación de las condiciones de vida, y se enmarcó claramente en el movimiento nacional de protesta que marca estos años en todo el país, con manifestaciones violentas en muchas ciudades del altiplano, del Oriente o del Pacífico (en Quibdó, Guapi y Buenaventura también aparecen este tipo de movilizaciones) .

Adicionalmente y de cierta forma marginal pero significativa, en Tumaco se difunde en aquellos días la “Proclama de Tumaco”<sup>5</sup> que se lee en plaza pública el 16 de septiembre, en la cual se plantean otros elementos. Después de recordar la contribución de Tumaco en las luchas de independencia (incluyendo la revuelta de 1781 que se califica de “primer grito de independencia en boca del negro Liberto Vicente de la Cruz”) y las guerras civiles, la proclama resalta las carencias en servicios públicos y concluye : “Hoy 16 de septiembre de 1988 nosotros negros descendientes de africanos con el corazón en las manos estamos izando a media asta el tricolor colombiano, por el cual dieron la vida nuestros antepasados, para expresar nuestro profundo dolor de sentirnos huérfanos de la Patria”. Termina la proclama amenazando con empezar la lucha por “la separación definitiva de nuestro territorio, de la República de Colombia” en caso de no ser escuchados.

Los argumentos de la Proclama remiten a una concepción de un “nosotros” distinto, cuya diferencia se funda en características identitarias y en una relación de deuda de la Nación hacia este “nosotros”. Las reivindicaciones no sólo piden justicia y respeto de la Nación hacia ellos como hacia cualquier ciudadano o parte de la República, sino que se buscan justificar : por ser descendientes de africanos (i.e. de esclavos traídos por esta Nación colombiana) y por haber servido la Independencia y las luchas nacionales. La noción misma de orfandad, que reaparece en otros discursos cuando se trata de política<sup>6</sup>, ubica las reivindicaciones en un plano moral a la vez

---

<sup>5</sup> Reproducida en Carlos A.Arango Calád, 1991

<sup>6</sup> Cf. entrevistas en Arango, 1991 donde los educadores expresan ser “huerfanos de coordinación” al hablar de las carencias de liderazgo, y en la cita de Julio C.Hinestroza, concejal de Buenaventura 1992-1994 que sintetiza su malestar frente a los pocos alcances de la política regional por la frase : “la gente del Pacífico ha

que de justicia social o política, pero de cierta forma asume y reproduce la lógica paternalista que rige las relaciones del gobierno con esta población, desde tiempos históricos y bajo distintas formas según las épocas (la esclavitud y el clientelismo siendo las formas más acabadas).

En esta reconstrucción identitaria, el “nosotros” se funda en criterios raciales (negros descendientes de africanos) aunque pretende abarcar el conjunto de la población movilizadora, la cual incluye una gran proporción de población local no negra. La diferencia se asume como marca de identidad local frente a “los otros” (serranos), al parecer con el asentimiento -parcial y pasivo- de los sectores no negros pero nativos de Tumaco que reconocen esta dimensión como parte de su propia identidad. La emergencia de la problemática étnica está todavía en ciernes en esta ocasión, como lo muestra tanto el carácter marginal de la Proclama como lo inacabado de su argumentación, pero siembra inquietudes que serán retomadas en los años siguientes, con particular fuerza en el marco de la discusión del AT 55 constitucional así como en las movilizaciones posteriores.

El Movimiento Cívico de 1995 recoge las experiencias previas pero rebasa el espacio de Tumaco, al reivindicar por primera vez un trato regional de los problemas, incluyendo la zona del piedemonte. La movilización masiva -10 días de cierre de la carretera - se da con el apoyo de militantes políticos de MOIR (Movimiento obrero independiente revolucionario), el ANUC (Asociación nacional de usuarios campesinos) y el Movimiento 19 de abril -M19- y, por primera vez de manera explícita, incluye la dimensión étnico-identitaria -“ahí participaron negros, indios y mestizos”. Las demandas rebasan los pliegos de peticiones de servicios e infraestructuras, e integran una reivindicación fundamental, la de ser reconocido como parte de la sociedad nacional a pesar de, o más bien junto con sus especificidades. En esta ocasión también, se alude a una ahora mítica separación de Tumaco de la nación colombiana, “amenaza” simbólica que aparece de manera reiterativa en todos los momentos de fuerte tensión regional<sup>7</sup>.

En veinte años, la sociedad tumaqueña emprendió acciones colectivas de alcance en por lo menos cuatro ocasiones, logrando movilizaciones que hasta cierto punto desembocaron en mejoras de la vida cotidiana, es decir logrando parte de sus objetivos inmediatos y anunciados. La participación es “popular”, aglutinante de los distintos sectores de la sociedad local sin que se diferencien grupos de intereses consolidados, aun si, del lado de los dirigentes, se puede reconocer una red de líderes locales provenientes de los ámbitos sindicales (varios con antecedentes en ANUC), políticos de izquierda (Unión Patriótica, MOIR, M19), elite social y política local inconforme con el betismo (concejales) y en algunos casos asesores de fuera (los universitarios), que intervienen en varias de las acciones colectivas. Por su parte la Iglesia y las ong (organización no gubernamental) no aparecen todavía -salvo en la última- ya que no emprenden trabajo comunitario significativo sino hasta los años 1980 (ver más adelante).

Estas acciones colectivas muestran entre sí ciertas constantes. En todos los casos se perfila una lucha contra del olvido y abandono del espacio local, las reivindicaciones tomando dos ejes principales :

---

estado huérfana del poder” (en Hinestroza, 1993), o más generalmente en los periódicos de estos años 1970 y 1980 que subrayan el abandono material de la región y la ausencia del Estado en el Pacífico.

<sup>7</sup> Recordemos el carácter fronterizo de la región de Tumaco, y la vigencia de una memoria colectiva que recuerda tiempos coloniales en que el Ecuador vecino (Provincia de Quito) abarcaba gran parte de la región, al limitar con lo que hoy es Colombia a altura del río Mira.

- uno de orden eminentemente político que cuestiona el papel del Estado y de los detentores del capital en la formación y desarrollo regional : el Estado a través de su modelo de redistribución que favoreció, históricamente, un clientelismo y un gamonalismo exacerbado en la región, y los agentes económicos con la implementación del modelo de producción-explotación que en los últimos veinte años ha marginado a gran parte del campesinado, a la vez que proletarizado un amplio sector de la población, tanto rural como urbano. En Tumaco -como en tantas otras partes del mundo- la “modernización” significó pérdida de autonomía para las unidades campesinas, dependencia y subordinación a intereses provenientes de fuera de la región.
- el otro eje es menos explícito pero siempre presente, de lucha contra el racismo y el modelo discriminatorio de relaciones económicas, sociales y políticas imperantes en Tumaco. Si a veces esta dimensión aflora de forma directa (en la Proclama de Tumaco por ejemplo), lo más seguido se expresa en las discusiones suscitadas alrededor de la movilización, más que en las declaraciones “oficiales”. Es decir, la asumen más los participantes, populares y negros en su mayoría, que los dirigentes que muchas veces son mestizos o blancos.

Ambos ejes convergen en la noción de “nativos” o “tumaqueños”, compartida por todos. El espacio local funge como catalizador a la vez que soporte a la movilización, algunos interpretando esta categoría de manera más política que otros. En el andar de las luchas, “lo local” funciona como un especie de comodín que propicia el consenso. Para todos, es claro que el espacio local está herido. Los actores lo son en cuanto “habitantes”, que reivindican su lugar en la sociedad, es decir un protagonismo digno con el Estado, un reconocimiento como ciudadanos enteros. Hasta estos momentos y en estos escenarios, la dimensión identitaria interviene bajo la forma de denuncia del racismo más que como reivindicación étnica, situación que cambia radicalmente a finales de los años ochenta.

### 3.2. Movimientos y organizaciones : la opción étnica, territorial y ambiental

En el amplio espectro de movilizaciones y movimientos que marcan este fin de siglo en Colombia, el más significativo es sin lugar a dudas el que emerge con el nuevo discurso identitario, que pone en el centro de las discusiones la dimensión étnica. No retomaré aquí el histórico de su conformación en el contexto de la discusión del Artículo transitorio 55 de la Constitución de 1991, solamente subrayaré algunas características que asume el movimiento en esta parte sur del Pacífico colombiano.

A partir de la Constituyente que abre nuevos espacios políticos, los militantes se reagrupan a principios de los años 1990 para lanzar las bases de un movimiento étnico negro y luego participar en la elaboración de la Ley 70. En Nariño éstos vienen de horizontes variados - educación popular, animación cultural<sup>8</sup>, movimiento cívico, sindicatos campesinos, raramente militantes políticos de los partidos - y no tienen globalmente antecedentes en materia de discurso étnico, aunque pueden tenerlo en términos de lucha contra la discriminación y de defensa de la cultura regional. Después de discusiones entre posiciones expresadas en términos de militancia en los partidos tradicionales, de lucha de clases y/o luchas agrarias, de combate contra la discriminación racial o aún de reivindicación étnico-cultural, sin olvidar la nueva preocupación

---

<sup>8</sup> Desde los años 1980 el sector artístico cultural viene desempeñando un papel preponderante en la concientización de la identidad negra, como lo muestran los trabajos de M.Aristizabal (1998) y tesis en curso.

por la conservación del medio ambiente y la biodiversidad, un grupo se consolida poco a poco alrededor de reivindicaciones étnicas y culturales, y participa en el Proceso de Comunidades Negras (PCN) de envergadura nacional : el Palenque Regional Nariño nació de esta manera. □ Ahí confluyen, al lado de líderes campesinos, muchos jóvenes, mayoritariamente urbanos, escolarizados, con o sin empleo y movidos por el deseo de participar.

El PCN aclara poco a poco sus posiciones hasta llegar a definir su eje de lucha alrededor de cuatro derechos fundamentales de las comunidades negras : el “derecho a Ser Negro, basado en la autodefinición de sí mismo como grupo étnico”, el “derecho al territorio, definido como el espacio donde se crea y recrea la vida cultural, social, política, organizativa y económica de las diferentes Comunidades Negras”, el “derecho a la autonomía, entendido como la posibilidad de desarrollar en la cotidianidad un que hacer propio basado en nuestras tradiciones, costumbres, sistema de derecho” y el “derecho a una visión propia del futuro”<sup>9</sup>. Al precisar que “todos estos derechos tienen un marco legal desarrollado de modo general en la Ley 70 de 1993”, el movimiento asume un doble frente de acción : hacia las poblaciones negras entre las cuales difunde sus planteamientos, hacia el Estado para hacer escuchar sus reivindicaciones.

A partir de 1993 efectivamente, Palenque Nariño asume la dirección del proceso de movilización regional, y se presenta como el interlocutor privilegiado del departamento de cara a la Dirección de Asuntos sobre las Comunidades Negras (Bogotá), miembro representante de Nariño en la Comisión Consultiva de Alto Nivel (nacional), miembro de los Comités regionales encargados de asegurar el seguimiento de los expedientes de titulación de territorios colectivos (con el Igac, el Ican, el Incora<sup>10</sup>, etc..) y en general de todas las instancias creadas para la aplicación de la Ley 70 en diferentes campos (educación, investigación, salud, programas de desarrollo, cooperación binacional con el Ecuador, etc.). La instancia regional de coordinación se implica masivamente en el espacio institucional abierto recientemente.

Al trabajo de difusión y explicación de la Ley 70, siguió y sigue la fase de constitución de Consejos comunitarios en miras a la titulación de territorios colectivos. Con modalidades diversas donde intervienen, además de Palenque, otros actores institucionales (Incora, la Iglesia, empresarios), se constituyeron una decena de consejos comunitarios hasta marzo de 1998, y desde esta fecha otros tantos se están consolidando. Es decir que en Nariño el proceso está ahora avanzando con cierta rapidez. Sin embargo enfrenta múltiples dificultades, debidas a fricciones internas entre individuos y grupos que participan en la movilización por un lado, a confrontaciones con actores exteriores pero influyentes en el proceso de titulación por otro (ver Agier y Hoffmann, 1999).

Con todo y sus debilidades, el movimiento que se gestó alrededor de la reivindicación étnica es hoy un actor legítimo en las esferas regionales y nacionales, y en Tumaco reúne a gran número de gentes que se reconocen como “del proceso” aun si no integran ni comparten las posturas y

---

<sup>9</sup> Documento mimeo, sin edición, de la Organización de Comunidades Negras, sin fecha pero mencionado en Escobar y Pedrosa (1996:245) como siendo al inicio del proceso que se da alrededor de la Asamblea Nacional constituyente de 1990, y cuyos planteamientos son retomados por el Proceso de Comunidades Negras hasta hoy.

<sup>10</sup> Ican: Instituto colombiano de antropología, Igac: Instituto geográfico Agustín Codazzi, Incora: Instituto colombiano de reforma agraria.

acciones de Palenque Regional Nariño. Sin embargo no está consolidado al punto de participar en las enmiendas políticas locales : el PCN no presentó candidato a las elecciones locales de 1997-1998 en Nariño, y los dos candidatos que se reclamaban del proceso no recogieron votos suficientes para integrar el Concejo municipal, en 1997.

Paralelamente a esta movilización que no pretende, con alguna excepción, investir el campo de la política partidista, se concretó, en 1992, un intento de participación electoral por parte de varios líderes y campesinos negros de la ensenada, muchos de ellos simpatizantes del Proceso de Comunidades Negras. Lo que se presentó como una alternativa político-electoral, “el movimiento Minga”, se gestionó en el ámbito de la cooperativa Coagropacífico, con el fin de “tener relación con el municipio en la parte política”, es decir agilizar la interlocución de los campesinos organizados con la alcaldía, sin afiliación política ni compromisos previos en términos clientelistas tradicionales (promesas de obras, empleos..) (A.Granja, oct. 1996). Dos meses antes de las elecciones municipales de 1992, “sin plata y sin nada”, se lanzan dos listas de Minga para el Concejo municipal, y se eligen en efecto dos concejales. En 1994 el movimiento vuelve a presentar candidatos y gana concejales, pero luego decae y ni siquiera presenta candidatos a concejales en 1997. Según militantes de Minga, el fracaso se debió a que “...los concejales se hicieron llevar por la tradición” y no pudieron enfrentar “tanta suciedad que hay dentro de la política” (id.). Dejaron de rendir cuentas a sus electores, no actuaron en el Concejo con acciones a favor de los campesinos de los ríos, dejándolos al contrario desprovistos frente al espíritu de revancha de los candidatos tradicionales que tardaron en “perdonarles” esta osadía política. Para ex-miembros de Minga y líderes de hoy, una falla principal residió en la pérdida de comunicación entre los concejales y los ríos, debida entre otras cosas a la falta de recursos para asumir de manera autónoma los gastos de viajes y de organización de reuniones (R.Sánchez, feb.1997).

Actualmente la opción étnico-territorial y la (efímera) político-electoral enfrentan un reto que de alguna manera les rebasa, el de la nueva violencia que empieza a azotar la región a partir de los años 1990, en particular en el área de la carretera Tumaco-Pasto. La zona de carretera reúne una serie de características que explica en cierta medida la situación actual. Ahí empezó, desde los años 1950-60, la expansión de las grandes ganaderías y plantaciones de palma africana que adquirieron la tierra por medios no siempre legales ni pacíficos, provocando entre los campesinos despojados y sus descendientes frustración y protestas que continúan hasta la fecha. Más recientemente, los narcotraficantes se apoderaron de ciertos lugares en la zona, trayendo sus luchas internas que terminan por matanzas entre ellos por un lado, con campesinos descontentos por otro lado. La guerrilla (el frente 29 de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y Comuneros del Sur del Ejército de Liberación Nacional), a veces llamada por los mismos campesinos amenazados de despojo y violencia, se hace más presente y llega a proceder a una “limpieza” de los delincuentes que se estaban multiplicando en la vía Tumaco-Pasto, agravando el número de muertos<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> Se habla de cerca de 62 muertos en esta zona de Tumaco en dos años, en una denuncia frente a la Organización de Naciones Unidas -ONU- por parte de la Comisión Nacional de Justicia y Paz en 1992. En el mes de junio de 1998 en Tumaco, otra ola de asesinatos se desató en contra de los delincuentes urbanos y más generalmente en contra de los jóvenes localmente conocidos como “aletosos” (ver Restrepo, en este mismo libro).

Hoy la guerrilla se extendió a gran parte de los municipios de la zona, incluyendo Tumaco. El cultivo de coca está generalizado y pequeños laboratorios se encuentran en varias partes. Los paramilitares anunciaron casi oficialmente su llegada a la zona (“a partir del 10 de enero de 1999”) y los militares se retiraron a sus cuarteles de Tumaco y de Candelilla del Mar. Todos los actores armados están presentes, pero en escenarios todavía no conectados sino yuxtapuestos en el espacio y, a la fecha, aparentemente sin pretensión a establecer relaciones fuertes de alianza o de ofensiva entre sí -aunque sus intereses inmediatos pueden llegar a coincidir en ocasiones. Sin embargo, en este contexto, la isla de paz que los congresistas vinieron a alabar en una sesión especial de la Cámara en Tumaco denominada “Cumbre de la Paz”, en mayo de 1998, se volvió otro territorio amenazado por la violencia (ver A.Pardo 1998).

#### 4. Una propuesta de interpretación

El panorama que acabamos de esbozar evidencia una especie de zanja entre el espacio de “la política” (competición electoral y juegos partidistas, administración territorial) y el de “lo político”, donde se forjan discursos y prácticas innovadores<sup>12</sup>. Al mismo tiempo que la gran corriente genéricamente llamada “nuevos movimientos sociales” se va consolidando, con tropiezos y conflictos pero a fin de cuenta generando un proceso distinto de participación, la esfera de la política sigue con lógicas tradicionales de alianzas y clientelismo. Se distinguen tres elementos principales que podrían explicar esta no-relación.

-En Nariño el rechazo explícito del movimiento étnico-territorial a participar en los juegos electorales induce en parte esta distanciamiento y casi autonomización de ambas esferas. “La política es politiquería”, “la política no representa a grupos sociales”, son comentarios generalizados entre dirigentes y militantes del Proceso. La ruptura ideológica que funda y legitima el movimiento social implica tomar distancia de las lógicas político-electorales.

-Ambas esferas, por ahora, se insertan en redes distintas de consecución de recursos, tanto para los líderes como para los militantes de base y en general la población. El sistema político tradicional funciona en gran medida en base a la redistribución de recursos locales, y en el contexto de marginalidad que conoce el Pacífico, la Alcaldía es un lugar estratégico para controlar esta redistribución : empleos básicamente, pero también trampolín para acceder a los espacios superiores donde se negocian las atribuciones de partidas, programas y créditos<sup>13</sup>. El movimiento social, que no tiene acceso a esta redes, no puede competir en esta lógica (Carlos Rosero citado por Agudelo, 1999), pero participa en otra estructura, donde también se dan lógicas de movilización de recursos aunque bajo otros criterios de redistribución.

-En tercer lugar, es importante recordar que esta distanciamiento no es privativa de la esfera política frente al movimiento social. De manera mucho más general, el ámbito de la política electoral

---

<sup>12</sup> Coincidimos aquí con la distinción de Mouffe (1995) que define "lo político" como "la dimensión del antagonismo que es inherente a todas las sociedades humanas" y "la política" como el ámbito que "se refiere al conjunto de prácticas, discursos e instituciones que buscan establecer un cierto orden y organizar la coexistencia humana en condiciones que siempre son potencialmente conflictivas, porque están afectadas por la dimensión de "lo político" (citado por Oslender, 1998).

<sup>13</sup> Como lo explica una candidata del MOIR a Concejo en 1997 : “aquí la gente hace clara diferencia entre el espacio de las elecciones y el espacio de reivindicaciones. Votan por Beto y después me vienen a ver para apoyarlos en las peleas populares”

suele manejarse al margen de las dinámicas sociales y económicas : no hay correspondencia directa entre grupos de intereses objetivos y grupos de presión política. Es decir, los grupos de poder -económico por ejemplo- no son visibles en la escena política, como si tuvieran sus propios mecanismos de negociación y acceso a recursos, sin necesidad de participar en las contiendas electorales. En este sentido es evidente la débil estructuración de la vida política regional, en la que los arreglos se negocian en función de las coyunturas del momento. No existe una “memoria política”, como lo demuestran las frecuentes inversiones de alianza o las adhesiones sucesivas y contradictorias de un mismo candidato, para hablar tan sólo de la última década.

Sin embargo, tampoco se podría deducir de estas constataciones la autonomía de las esferas sin caer en simplismos. De hecho son variados los mecanismos de retro-alimentación entre el ámbito político-electoral y el de los movimientos y movilizaciones.

Uno de ellos se refiere sencillamente a la participación simultánea o consecutiva de personas a ambas lógicas : reconversión de líderes comunitarios en actores políticos, implicación de políticos locales en ciertos movimientos populares, o las dos cosas a la vez, compromiso popular y participación electoral. En Nariño estas situaciones se dan con frecuencia desde unos 20 años (Manzi, Kaiser, Rosero, Roy Sánchez, Montufar, Newton Valencia y muchos otros...). Al establecer estos puentes, los individuos contribuyen lógicamente a que ciertos niveles o registros de discursos traspasan de una a otra esfera, aunque sea de manera marginal o coyuntural. Por ejemplo, la aparición del discurso étnico en las campañas electorales, por efímera y artificial que sea, no deja de modificar la percepción que de su propia identidad tienen los habitantes-votantes sometidos a grandes campañas electorales cada tres años.

Ahora bien, la posibilidad de intervenir en este doble campo de acción, por parte de líderes y dirigentes, proviene en gran medida de la existencia de lo que llamé “los espacios de participación popular”, que, sin ser catalogables en una u otra vertiente (la política o lo político), propician la comunicación y la discusión entre ambas. En la región de Tumaco entrarían en esta categoría la principal ong internacional, Plan Padrino Internacional, las asociaciones y ongs locales, el Convenio Holanda-CVC (Corporación autónoma regional del Valle del Cauca), las cooperativas, el sector artístico cultural y por supuesto la Iglesia, muy presente en la movilización de los últimos años (ver Hoffmann 1999). Estos escenarios conforman un ámbito de concientización y movilización, así como de capacitación de líderes que después se orientan hacia una u otra forma de acción. La importancia de estos escenarios reside en su papel de socialización de los nuevos discursos y de constitución de un capital político-cultural susceptible de invertirse después en otros campos. Se volvieron así un componente principal en la construcción de una democracia local, como ya fue subrayado por Pardo (1997) y otros.

Al hacer esta rápida revisión histórica de los procesos políticos en el Pacífico nariñense, aparecen rasgos de continuidad entre lógicas de acción que, a priori, suelen considerarse como opuestas. Uno de los principales reside en el uso e instrumentalización de la identidad como motor de movilización y motivo de adhesión a los grupos y/o movimientos políticos. Hoy en día esta dimensión funda, de manera explícita, las acciones y principios del nuevo movimiento social en el Pacífico. La reivindicación de una identidad negra propia, distinta “del otro”, es lo que une las distintas corrientes del movimiento negro y lo que da sustento a sus propuestas políticas y organizativas. Ayer fue esta misma reivindicación identitaria, aunque basada en otros criterios, la

que permitió a Beto Escrucería aglutinar a amplios sectores de la población. La gran habilidad del gamonal fue haber “inventado” y anclado en la sociedad local la noción de “identidad tumaqueña”, y haberla alzado en alto frente a “los otros”, en aquel momento los “pastusos”, “serranos” y demás representantes de un poder central que abandonaba y denigraba la región. La identidad regional, sin referencias étnicas, permitió a Beto ocultar la dimensión de la segregación racial - en el plano de las representaciones colectivas<sup>14</sup> - para suscitar un consenso alrededor de una discriminación regional compartida por todos los sectores. Evadió así la cuestión de la dominación racial y de clase, ubicándose como el defensor de un sujeto común -“la región de Tumaco y el litoral nariñense”- en el que todos se reconocían. Esta invención discursiva conservó cierta eficacia política mientras estaba sustentada en prácticas de redistribución de recursos, es decir, mientras el hecho de “ser tumaqueño” y de pasar por alto las diferencias étnicas y socioeconómicas permitía acceder a ciertos beneficios materiales o políticos. Perdió vigencia cuando fue cuestionada por sus dos extremos : por un lado cuando el sistema de redistribución clientelar se agotó por falta de recursos y sobre todo de trabajo político por parte del líder principal, el hijo de Beto Escrucería ; por otro lado a partir del momento en que la concepción de la identidad se modificó drásticamente a nivel regional, con la emergencia del discurso étnico a fines de los años 1980.

La separación tajante entre los circuitos de recursos a los que pueden aspirar los distintos actores locales propicia una fuerte distanciamiento entre el escenario político-electoral y el de los movimientos sociales. Pero los lazos no dejan de existir, al compartir mecanismos de instrumentalización de la identidad para sustentar sus proyectos y acciones. Finalmente, es obvio que los dos escenarios se juntan o se juntarán en el momento en que coincidan en la lucha por el poder que, si bien no está explícito por el momento dado el estado de las relaciones de fuerzas, es una dimensión intrínseca a cualquier movimiento social que aspira a ser reconocido y tomado en cuenta. Como lo reconocen algunos de sus prominentes líderes, “el Proceso de Comunidades Negras (...) pretende en términos generales : construirse como una opción de poder para las comunidades negras ; aportar a la consolidación del movimiento social de las mismas ; y contribuir desde su ideario y acciones a la búsqueda de opciones de sociedad más justa” (Gruoso, Rosero y Escobar, 1997).

## Bibliografía

Agier, Michel y Odile Hoffmann, 1999, Les terres des communautés noires dans le Pacifique colombien. Interprétations de la loi et stratégies d'acteurs, Paris, Problèmes d'Amérique Latine, n° 32, janvier-mars 1999, Paris, La Documentation Française.

Agudelo, Carlos Efren, 1998, Aproximación a la dinámica de un pueblo del Pacífico, el caso de Guapi, Cali, documento de trabajo N°23, CIDSE-ORSTOM.

Agudelo, Carlos Efren, 1999, Changement constitutionnel et organisation des mouvements noirs en Colombie (Note de recherche), Paris, Problèmes d'Amérique Latine n° 32, janvier-mars 1999, Paris, La Documentation Française.

---

<sup>14</sup> Al contrario, a nivel individual, son innumerables los recuerdos y testimonios del racismo ambiente en esta época del gamonalismo blanco en la región.

- Arango Calád, Carlos A., 1991, Comportamiento participativo y educación popular, el caso de Tumaco, Universidad del Valle, Departamento de Psicología, Serie Investigaciones.
- Aristizabal, Margarita, 1998, “El festival del currulao”, pp413-445 en M.L.Sotomayor (editora), Modernidad, identidad y desarrollo, ICAN-Min. de Cultura-Colciencias, Bogotá, 1998
- Escobar, Arturo y Alvaro Pedroza (eds), 1996, Pacífico : desarrollo o diversidad? Estado, capital y movimientos sociales en el Pacífico colombiano, CEREC-Ecofondo, Bogotá.
- Gúzman Hoyos, Jaime, 1977, Situación económica y social de Tumaco, tesis de Antropología social, Universidad del Cauca, Popayán, p91
- Grueso, Libia, Carlos Rosero y Arturo Escobar, 1997, El proceso organizativo de comunidades negras en el Pacífico sur colombiano, trad. del artículo publicado en S.Alvarez, E.Dagnino y A.Escobar, Cultures of Politics/Politics of culture : reversioning Latin american social movements, Boulder, Colorado, USA : Westview Press.
- Helfrich, Linda, 1998. Elecciones : entre gamonalismo y civismo. El caso de Tumaco en la Costa Pacífica, manuscrito IEPRI, Bogotá.
- Hinestroza, Victor Hugo, 1993, Transformaciones socio-culturales y evolución política del hombre y las comunidades de la costa pacífica, una visión antropológica, Fac. de Humanidades, Universidad del Cauca, Popayán.
- Hoffmann, Odile, 1998, Políticas agrarias, reformas del Estado y adscripciones identitarias: Colombia y México, Análisis Político N°34, mayo/agosto 1998, pp3-25, Bogotá.
- Hoffmann, Odile, 1999, “La política” Vs “lo político” ? La estructuración del campo político contemporáneo en el Pacífico sur colombiano, Docuemntos de trabajo del CIDSE N°39, UNIVALLE, Cali
- Khittel, Stephan, 1999, Territorio y clientelismo político : el ejemplo del municipio de Quibdó, pp177-191 en J.Camacho y E.Restrepo (edit.), De montes, ríos y ciudades. Territorios e identidades de la gente negra en Colombia, Fundación Natura-ECOFONDO-ICAN, Bogotá, 354p..
- Leal Buitrago, Francisco et Andrés Davila Ladron de Guevara. 1994. Clientelismo, el sistema político y su expresión regional. Bogotá, Tercer Mundo editores, 382p.
- Mouffe, Chantal, 1995, Post-Marxism : democracy and identity, Environment and Planning D: Society and Space, vol.13, pp259-265.
- Pardo, Alfonso, 1998, Nariño, un departamento en conflicto, pp155-169 en Conflictos regionales, Atlántico y Pacífico, IEPRI (Universidad Nacional)-FESCOL, Bogotá, 184p.

Pardo, Mauricio, 1997, Movimientos sociales y actores no gubernamentales, pp 207-252 en MV.Uribe y E.Restrepo (edit.), Antropología en la modernidad, ICAN-Colcultura, Bogotá, 399p.

Oslender, Ulrich, 1998, Espacializando resistencia :perspectivas de 'espacio' y 'lugar' en las investigaciones de Movimientos Sociales", Fac. de Geografía, Univ. de Glasgow, Glasgow, multigr.

Whitten, norman. 1992. Pioneros negros: la cultura afro-latinoamericana del ecuador y colombia. Centro cultural afro-ecuatoriano. Quito.